

I

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que se acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

Sentado lo anterior, la consulta plantea el análisis del proyecto normativo de la Orden Ministerial de referencia la cual tiene por objeto regular el régimen de actuaciones realizadas a través de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de interposición, tramitación y resolución de reclamaciones y recursos en vía económica-administrativa, así como la aprobación de formularios de dichos procedimientos.

El señalado proyecto se estructura en seis artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales. No tiene impacto presupuestario, de género, ni en la infancia y adolescencia, si bien se aprecian una serie de reducciones de cargas administrativas que son detalladas en el anexo de esta materia.

Desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal procede comenzar indicando que los datos personales constituyen la materia prima de la sociedad de la información, algunos autores los califican como el petróleo de la economía digital, de manera que difícilmente los servicios públicos y la sociedad del bienestar o las empresas podrán funcionar actualmente de una manera adecuada sin ellos.

Dado su reconocimiento como un derecho fundamental, estos datos personales (que son en realidad cualquier dato o información de una persona física identificada o identificable) no pueden utilizarse sin más, sino que deben

respetarse unas reglas sobre su utilización, las cuales indican cuándo y cómo pueden ser tratados.

En este contexto las principales normas reguladoras del derecho fundamental a la privacidad de los datos personales son, en síntesis, las siguientes:

1. Reglamento general de protección de DP UE 2016/679 del Parlamento y del Consejo, 27 de abril de 2016.
2. Directiva 2016/680, relativa al tratamiento para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales.
3. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de DP y garantías de los derechos digitales, y que sustituye a la anterior LOPDCP de 1999, por la que se adapta el marco español al Reglamento europeo y se desarrollan algunos de sus aspectos.
4. Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

Las citadas normas establecen el marco normativo básico en materia de protección de datos que luego se podrá concretar en cada sector específico, dentro siempre del marco de referencia establecido por la normativa europea reguladora de este derecho fundamental.

El proyecto normativo objeto de esta consulta en lo relativo al régimen jurídico de datos personales proyecta su regulación en la disposición adicional segunda, sobre datos personales, que a continuación se transcribe (el subrayado es nuestro):

“La finalidad del tratamiento de los datos recogidos en los formularios aprobados por la presente orden es la tramitación y resolución de reclamaciones y recursos económico-administrativos, siendo responsable del tratamiento de dichos datos el Tribunal Económico-Administrativo Central. Este tratamiento se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En la sede electrónica de los Tribunales Económico-Administrativos se facilitará la información que exige el artículo 13 del Reglamento relativa al tratamiento y al ejercicio de los derechos sobre el mismo.

La base de legitimación se encuentra recogida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, normas que atribuyen competencia a los Tribunales Económico-Administrativos para la tramitación y resolución de reclamaciones y recursos económico-administrativos.

Las categorías de destinatarios a quienes se comunicarán los datos serán Administraciones Públicas y órganos jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias.

Las categorías de los interesados se centran en los reclamantes e interesados en los procedimientos económico-administrativos, así como sus representantes.

Respecto a las categorías de datos personales, se realizará el tratamiento sobre datos de carácter identificativo y datos de carácter tributario o económico, exigiéndose en el primer caso únicamente los requeridos por la normativa vigente, y en cuanto a los segundos, los aportados por los órganos gestores que conforman el expediente objeto de los procedimientos económico-administrativos, por lo que se cumple el principio de proporcionalidad exigido por la normativa sobre protección de datos.

Las medidas de seguridad implantadas para la protección de estos datos se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y que se encuentran descritas en los documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información del Ministerio de Hacienda”.

II

Entrando al examen de su contenido se hace notar, en primer lugar, el carácter tributario que con carácter general van a tener los datos aquí tratados, lo que impone la obligación de tener en cuenta la normativa especial propia de este ámbito. Dicho lo cual, procedemos a analizar en detalle cada uno de los apartados de la citada disposición adicional segunda; la cual, en su primer apartado detalla la finalidad del tratamiento de los datos recogidos en los formularios que se aprueban a través de ella la cual consistirá en *la tramitación y resolución de reclamaciones y recursos económico-administrativos*. A este respecto hacemos dos precisiones. La primera consiste en enfatizar la importancia de los fines para los que queda habilitado el tratamiento de datos, dado que de conformidad con el principio de limitación de la finalidad (artículo 5.1.b) RGPD) los datos personales serán recogidos para fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible

con dichos fines. La segunda consiste en hacer notar que el contenido de los formularios que a través de esta Orden Ministerial van a aprobarse queda fuera del alcance de este informe, no constando asimismo entre la documentación recibida.

Seguidamente, el citado primer apartado especifica que el responsable del tratamiento de dichos datos será el *Tribunal Económico-Administrativo Central*. De modo que, de conformidad con el principio de responsabilidad proactiva (artículo 5.2 RGPD) corresponderá a este Tribunal aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme a la normativa en materia de protección de datos de conformidad con el artículo 24.1 RGPD.

En cuanto a la obligación de información prevista en el artículo 13 del RGPD y referida en dicho apartado, se llama la atención sobre la necesidad de garantizar el suministro de dicha información con pleno respeto a los términos previstos en el citado precepto, correspondiendo, a modo de mero ejemplo, al responsable del tratamiento facilitar la información que se especifica en el mismo momento en que se obtengan los datos personales relativos al interesado. Por lo que, a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de este deber, se recomienda comprobar si la previsión consistente en facilitar la información en la sede electrónica cumple o no con este deber de información.

En su segundo apartado la citada disposición refiere que la base de legitimación de estos tratamientos resulta de *la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, normas que atribuyen competencia a los Tribunales Económico-Administrativos para la tramitación y resolución de reclamaciones y recursos económico-administrativos*, haciéndose notar, a este respecto, la conveniencia de precisar los preceptos legales que recogen esta atribución de competencias en cuya virtud se legitiman los tratamientos de datos personales que van a realizarse al quedar amparados por las bases jurídicas reguladas en el artículo 6.1. c) y e) del RGPD.

En su apartado tercero y cuarto la citada disposición establece respectivamente que las categorías de destinatarios a quienes se comunicarán los datos serán las *Administraciones Públicas y órganos jurisdiccionales en el*

ejercicio de sus competencias; y que las categorías de interesados se centran en reclamantes e interesados en los procedimientos económico-administrativos, así como sus representantes. Sentado lo cual, sin olvidar que la licitud de todo tratamiento de datos exige con carácter previo la existencia de alguna de las bases legitimadoras del artículo 6 RGPD junto con el pleno respecto a los principios del artículo 5 RGPD, procede indicar que en lo que se refiere a los tratamientos de datos realizados por los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias habrá de estarse a la regulación contenida tanto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, como en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Por lo que, no solo la comunicación de datos prevista a los órganos jurisdiccionales habrá de hacerse con pleno respeto a las garantías legales existentes, sino que en relación con los sujetos a los que el ordenamiento jurídico imponga un deber de colaboración con las autoridades competentes la comunicación de datos personales habrá de realizarse de conformidad con el artículo 6.1.c) RGPD, y con las limitaciones que establece el artículo 7.4 LO 7/2021.

En cuanto a la comunicación de datos entre Administraciones Públicas procede añadir que en el caso de tratamientos de datos de las Administraciones Públicas, basados con carácter general en el artículo 6.1.c) y e) RGPD, deberán ser las correspondientes disposiciones legales las que establezcan la obligación o atribuyan la competencia que legitime los tratamientos para fines diferentes, entendiéndose, con carácter general que la cesión de datos a órganos de otras AAPP cuando se ampare en el ejercicio de sus competencias estará amparada en el hecho de ostentar los mismos legitimación para el tratamiento de los datos en el marco de sus potestades de derecho público, siempre que no se trate de cesión masiva de datos y siempre que la legislación especial no limite los supuestos en los que procede tal comunicación. En el supuesto objeto de análisis al tratarse de datos tributarios deberá respetarse el carácter reservado que tienen reconocido estos datos y la consiguiente limitación de los supuestos de cesión regulados en el artículo 95 LGT.

Pasando al análisis del apartado quinto de la disposición adicional que estamos examinando, su tenor literal es el que sigue:

“Respecto a las categorías de datos personales, se realizará el tratamiento sobre datos de carácter identificativo y datos de carácter tributario o

económico, exigiéndose en el primer caso únicamente los requeridos por la normativa vigente, y en cuanto a los segundos, los aportados por los órganos gestores que conforman el expediente objeto de los procedimientos económico-administrativos, por lo que se cumple el principio de proporcionalidad exigido por la normativa sobre protección de datos”.

Como más arriba se ha apuntado, los principios que todo tratamiento de datos debe respetar como *conditio sine qua non* para ser válido, y sin perjuicio de la necesaria concurrencia de algunas de las bases de legitimación previstas en el artículo 6 RGPD, son los que regula en artículo 5 RGPD y que pasamos a enumerar: principio de licitud, lealtad y transparencia, principio de limitación de la finalidad, principio de minimización de datos, principio de exactitud, principio de limitación del plazo de conservación, principio de integridad y confidencialidad, y principio de responsabilidad proactiva.

Debiéndose distinguir en este punto entre los principios generales de todo tratamiento de datos, y los principios que son exigibles a las leyes legitimadoras de tales tratamientos, a propósito de las cuales se requiere que, en efecto, dichas leyes respeten, en todo caso, el principio de proporcionalidad, tal y como recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional 14/2003, de 28 de enero: *“En otras palabras, de conformidad con una reiterada doctrina de este Tribunal, la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad. A los efectos que aquí importan basta con recordar que, para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad), si además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”.*

En la medida en que la citada disposición está regulando el modo en que habrán de llevarse a cabo tales tratamientos, pero no habilitando supuestos en los que dichos tratamientos podrían realizarse, algo que de ninguna manera sería posible por estar reservada dicha posibilidad a su regulación por norma legal, se recomienda revisar el tenor literal del apartado quinto a fin de

adecuarlo al necesario respeto de los principios del artículo 5 RGPD, con mención especial del principio de minimización de datos, en cuya virtud únicamente podrán recogerse aquellos datos que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que van a ser tratados.

Finalmente, el apartado sexto de la disposición examinada se refiere a las medidas de seguridad implantadas para la protección de datos con remisión al Anexo II que no consta entre la documentación recibida para la elaboración de este informe, y cuyo examen en todo caso excedería de los límites del mismo.

Sin perjuicio de todo ello, se recuerda la existencia de una Guía elaborada desde esta AEPD titulada “Orientaciones para la realización de una evaluación de impacto para la protección de datos en el desarrollo normativo” la cual tiene por finalidad servir de guía para la realización de una evaluación de impacto para la protección de datos (EIPD) en el marco de la elaboración de una Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), cuando las iniciativas legislativas de las Administraciones Públicas que sean competencia de la AEPD impliquen un tratamiento de datos personales.